
MINUTA INVITACIÓN AUDIENCIA ANTE LA COMISIÓN DE SISTEMAS DE
JUSTICIA - CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
DJ/UNR/08.11.2021

Se ha solicitado a la Unidad de Normativa y Regulación del Consejo para la Transparencia elaborar una minuta para la audiencia ante la **Comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional**, de la Convención Constitucional, a la que ha sido invitada la Presidenta del Consejo para la Transparencia, Sra. Gloria de la Fuente, el día miércoles 10 de noviembre, a las 11.55 horas.

En particular, se ha invitado a la Presidenta del Consejo a exponer sobre “**Órganos de control y órganos autónomos**”, en el marco de las competencias otorgadas a la Comisión.

1. Principio de publicidad como elemento configurador en un Estado de Derecho.

El actual artículo 8° de la Constitución Política de la República, incorporado en la reforma constitucional del año 2005, establece que “*son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen*”, señalando a continuación los casos excepcionales en cuya virtud se puede establecer la reserva o secreto de dichos antecedentes.

Por lo tanto, **desde el año 2005 se encuentra reconocido expresamente, con rango constitucional, el principio de publicidad respecto de todos los Órganos del Estado.** Luego, dado que ya se reconoce a nivel constitucional el principio de publicidad, su contenido y alcance no puede ser restrictivo, sino que el marco normativo subsecuente debe necesariamente desarrollar tal principio, que es lo que ha venido a efectuar la Ley de Transparencia, desde su dictación en el año 2008, como también otros cuerpos normativos.

Sin embargo, y dado el actual contexto político, social, cultural, que atraviesa nuestro país, el principio de publicidad y transparencia se torna más urgente y necesario que nunca, y el acceso a la información pública, la publicidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado, y la transparencia en los mecanismos de la toma de decisiones, se han transformado en **herramientas fundamentales para garantizar el Estado de Derecho y el régimen democrático.**

A partir de la reforma constitucional del año 2005, que incorporó el principio de publicidad de los órganos del Estado, **se han llevado adelante numerosas reformas legislativas tendientes a perfeccionar el régimen de transparencia y a fortalecer la publicidad como un mecanismo que contribuye a aumentar los estándares de integridad y probidad en el ejercicio de la función pública.** Es así, como junto con la dictación de la Ley de Transparencia, el año 2014 se dictó la ley que regula el Lobby, la ley de probidad en la función pública y prevención de los

conflictos de interés, la ley sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, la ley de fortalecimiento y transparencia de la democracia, entre otros cuerpos normativos que van en la línea de aumentar los estándares de transparencia, probidad e integridad en el ejercicio de la función pública.

Como señala la académica Gladys Camacho¹, **toda la normativa tendiente a garantizar los principios de publicidad y probidad, se inscriben en el objetivo que apunta a afianzar el Estado Democrático y de derecho, lo que demanda un esfuerzo permanente para perfeccionar y profundizar los mecanismos de control del poder.** En este sentido, agrega Camacho, la eficacia de los controles resulta gravitante para asegurar la efectividad del mismo texto constitucional. Sin embargo, como señala a continuación, por importantes que sean los controles, éstos no resultan suficientes para hacer frente a todos los problemas que genera el control del poder, y, por lo tanto, **la transparencia y el acceso a la información pública surgen como categorías fundamentales que apuntalan el sistema de control social, colaborando de manera eficaz a disminuir el distanciamiento entre los ciudadanos y sus gobernantes.**

2. Institucionalidad del Derecho de acceso a la información como un Derecho Fundamental.

El derecho de acceso a la información no sólo se encuentra reconocido a nivel del derecho interno, sino que existen diversos tratados internacionales vigentes, y ratificados por Chile, que consagran el derecho fundamental a buscar y recibir información de toda índole y por cualquier procedimiento.

Así, destaca el **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, promulgado por el Decreto Supremo N° 778, de 1976, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que junto con establecer que cada uno de los Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en aquél, dispone en su artículo 19 N° 2 que, *“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho **comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole**, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.*

En semejantes términos, se integra al ordenamiento jurídico chileno, el **artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos Humanos o CADH)**, aprobado por el decreto supremo N° 873 de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que **reconoce el acceso a la información como un derecho implícito en la Libertad de pensamiento y de expresión.**

¹ Camacho Cepeda, Gladys. Sobre la transparencia, el derecho de acceso a la información pública y los deberes de publicidad. Su diferencia conceptual y práctica. Revista de Derecho Público, número especial 2018, pp. 75-95.

Por lo tanto, consideramos de **suma relevancia consagrar de manera expresa a nivel constitucional, el derecho de acceso a la información, como un derecho fundamental e independiente**, cuyo desarrollo y alcance sean fijados de manera general en el texto constitucional. Las características de este derecho lo transforman también en una garantía de otros derechos fundamentales, en tanto la publicidad de los actos de los órganos del estado constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales.

El reconocimiento explícito del derecho de acceso a la información en el texto constitucional conlleva a su vez la consolidación del acceso a la información pública como un mecanismo para (i) el control social de la actividad pública, (ii) para la participación ciudadana informada y (iii) para el ejercicio adecuado y oportuno de otros derechos (derecho llave).

De dicho modo, si se despejan los obstáculos para que la ciudadanía pueda demandar y obtener información pública de calidad **se encontrará en una mejor posición para exigir rendición de cuentas de sus autoridades.** En otras palabras, la ciudadanía informada oportunamente de los actos y decisiones públicas puede ejercer de mejor modo el rol contralor de los procesos públicos, que inciden en definitiva en su calidad de vida.

A su turno, la ciudadanía que puede acceder sin obstáculos a la información pública podrá jugar un papel activo en los espacios y definiciones públicas. La participación informada se constituye entonces en un pilar fundamental de los sistemas democráticos, contribuyendo a la fe pública y el fortalecimiento de las instituciones.

En particular, en lo que dice relación con la participación informada de la ciudadanía como **correlato del principio de publicidad y del ejercicio libre y sin obstáculos del derecho de acceso a la información**, el Consejo para la Transparencia ha jugado un rol preponderante en la comprensión, por parte de la Administración del Estado, de la **relevancia del lenguaje claro y comprensible para todas y todos**. El derecho de acceso a la información no se satisface plenamente si los antecedentes a los que se accede se presentan de tal forma que entorpecen u obstaculizan la cabal comprensión por parte de la ciudadana o ciudadano solicitante. Se suma a lo anterior, la consideración de la coexistencia en nuestro país de diversos sistemas culturales y sociales, lo que refuerza entonces la necesidad de proveer la información en términos comprensibles y accesibles para todas y todos.

Finalmente, el derecho de acceso a la información se traduce también en una herramienta para ejercer otros derechos fundamentales, circunstancia que lo reviste de un rol garante en un Estado de Derecho, en tanto la publicidad de los actos de los órganos del estado constituye un soporte básico para el adecuado ejercicio y defensa de los mismos.

3. **Reconocimiento constitucional del Derecho de acceso a la información como un Derecho Fundamental en las Constituciones a nivel global.**

Cerca de un 50% de las Constituciones a nivel comparado **reconocen el Derecho de acceso a la información como un derecho fundamental**. A modo ejemplar, en la Constitución de Finlandia se reconoce a contar del año 1999, se reconoce el derecho de acceso en el siguiente sentido: *“Los documentos y otros registros en dominio de las autoridades son públicos, si su publicidad por motivos imperiosos no está expresamente limitada por Ley. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información de los documentos y registros públicos.”*. (artículo 12, párrafo 2).

También es importante destacar en el ámbito del derecho latinoamericano, lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 60, junto con reconocer que *“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”*, da cuenta que para asegurar y resguardar dicho derecho se *“contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública”*².

Entre otros países, los siguientes han incorporado de forma explícita el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental en sus textos constitucionales: Austria, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Hungría, Indonesia, Noruega, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Sudáfrica, Suecia.

4. **Necesidad de un órgano de control y autónomo que pueda velar por el principio de publicidad por parte de todos los órganos del Estado.**

Reconociendo la categoría de derecho fundamental que tiene el derecho de acceso a la información, y consecuentemente también el principio de publicidad resulta necesario contemplar la existencia de mecanismos de control que ofrezcan a los titulares del derecho la posibilidad de obtener su satisfacción frente a los sujetos obligados, ya que la ausencia de mecanismos concretos que tutelen el derecho nos impide hablar de una verdadera existencia jurídica de derechos. En definitiva, se trata de que exista una adecuada protección de los derechos fundamentales, a través del control por órganos que formen parte, ya sea de la

²<https://docs.mexico.justia.com/federales/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos.pdf>
Fecha de revisión [9 de noviembre de 2021].

administración o jurisdiccionales, ante los cuales se pueda alegar la vulneración del derecho y que entreguen, en un sentido integral, protección a los mismos.

La existencia de órganos de control, autónomos, que garanticen y tutelen el efectivo ejercicio del derecho resulta fundamental y es un presupuesto necesario para la existencia jurídica del derecho fundamental, ya que implica con carácter general la posibilidad de pretender la protección del derecho ante órganos con competencia para restaurar una eventual vulneración de los mismos, y que a través de un proceso reglado busquen la defensa del derecho fundamental.

Es en este sentido entonces, que el derecho de acceso a la información, en tanto derecho fundamental, requiere también de la existencia de un órgano garante y de control que le otorgue la adecuada protección y garantía al ejercicio del derecho. Frente a una eventual vulneración de los derechos y deberes consagrados en la Ley de Transparencia, como en general al derecho de acceso a la información, **se requiere de un órgano de control externo, independiente de la Administración Pública o de cualquier otro órgano público, ya que la naturaleza de sus funciones hace incompatible cualquier tipo de subordinación hacia los sujetos pasivos de control.** Así, una entidad especializada y sin dependencia del Gobierno, otorga credibilidad y legitimidad a la política pública de transparencia, ya que su control no es ejecutado por los mismos órganos de la Administración Central que se encuentran sujetos a su cumplimiento.

A su vez, dado que el derecho de acceso a la información se vincula directamente con el control social que ejerce la ciudadanía sobre los órganos del Estado, resulta fundamental que la acreditación del cumplimiento de esta ley, y del derecho, sea realizada por un órgano totalmente independiente que no forme parte de otro órgano estatal, dando mayor credibilidad al ejercicio de esta función, favoreciendo la percepción de mayor confianza las entidades públicas.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Transparencia, el Consejo para la Transparencia tiene el mandato legal de promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado, y garantizar el derecho de acceso a la información. Luego, de manera específica, el artículo 33 de la misma ley le entrega al Consejo la función de resolver los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados. Es precisamente esta función, junto con las demás que le asigna la ley, la que hace que el carácter de autónomo e independiente del órgano de control sean considerados como indispensables, por cuanto son precisamente los distintos órganos de la Administración del Estado los sujetos pasivos obligados a cumplir con el derecho de acceso a la información.

Con todo, se debe hacer presente que, a efectos de que la función de órgano garante pueda ser cumplida con eficacia, la posibilidad de controlar la actuación estatal en materia de publicidad y transparencia, y, en definitiva, de ser un verdadero garante ante la eventual vulneración del derecho de acceso por cualquier entidad, **requiere necesariamente que el órgano de control tenga competencia sobre cualquiera otra autoridad del Estado, independiente de su naturaleza jurídica y nivel de autonomía.**

Esta última idea ya fue considerada previamente por un voto de disidencia de Tribunal Constitucional, al controlar preventivamente el proyecto de ley de transparencia. En aquella oportunidad se consideró que respecto de aquellas materias que no eran “*las propias de su competencia constitucional o esencial*”, esto es, que no afectaban la autonomía de estos órganos para resolver materias de su exclusiva competencia, era posible ejercer un control externo en relación con la garantía del derecho de acceso a la información, control externo que no implicaría una vulneración a la respectiva autonomía del órgano en cuestión.

En efecto, en la actualidad el Consejo para la Transparencia **ya ejerce plenas facultades y competencias, en materia del derecho de acceso a la información, sobre distintos órganos de la Administración del Estado, como también respecto de determinados órganos autónomos constitucionales como las municipalidades, los gobiernos regionales, el Servicio Electoral y el Consejo Nacional de Televisión.**

5. Garantía distinta y diferenciadora respecto del derecho de acceso a la información pública.

Por su parte, la existencia de un órgano de control autónomo, que garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información también **requiere de mecanismos que aseguren su debido ejercicio, en forma oportuna y expedita.** En este sentido, se debe destacar que actualmente la regulación vigente contempla una herramienta jurídica que permite a los ciudadanos solicitantes de información recurrir de amparo ante una entidad autónoma e independiente. **Este procedimiento de amparo del derecho satisface las exigencias que en un Estado de Derecho se configuran para velar por el efectivo ejercicio del derecho.**

De esta forma, **el procedimiento de amparo representa una vía de fácil acceso para hacer valer el derecho ante la Administración, no irroga costos para el reclamante (es por definición gratuito y no presenta complejidades en su interposición) y además, se contempla una revisión judicial de las decisiones que se pronuncien sobre éste, en esta primera instancia administrativa, asegurando de dicho modo, la revisión de las decisiones por un órgano externo, en este caso en particular, los tribunales de justicia.**

En este sentido, como destacan los profesores José Francisco García y Gastón Gómez³, **bajo los parámetros definidos por la OEA, en su ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública, como en la guía para su implementación, el Consejo para la Transparencia, en tanto órgano garante y de control del derecho de acceso a la información, independiente, sectorial y especializado, es considerado un modelo a imitar en la región.**

³ García, Jose Francisco, Gómez, Gastón. INFORME EN DERECHO: Aspectos de derecho público y diseño institucional del proyecto de ley que modifica la Ley N°20.285 sobre acceso a información pública (Boletín N°12.100-07). 2018. Disponible en <https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/documents/10179/62801/Informe+final+Ley+Transparencia+2.0+GPG.PDF/56da226d-e2b6-4021-ab54-e406ebabd503>

Entre otras cosas, la Ley Modelo destaca del modelo chileno la importancia de contar con un órgano supervisor especializado capaz de generar políticas uniformes en materia de información pública, para todos los organismos obligados por la normativa, que tenga además la facultad de coordinar los esfuerzos de distintas áreas, capacitar recursos humanos, generar conciencia ciudadana, identificar y difundir buenas prácticas, asesorar a funcionarios y desarrollar mecanismos para facilitar la gestión de las solicitudes de información.

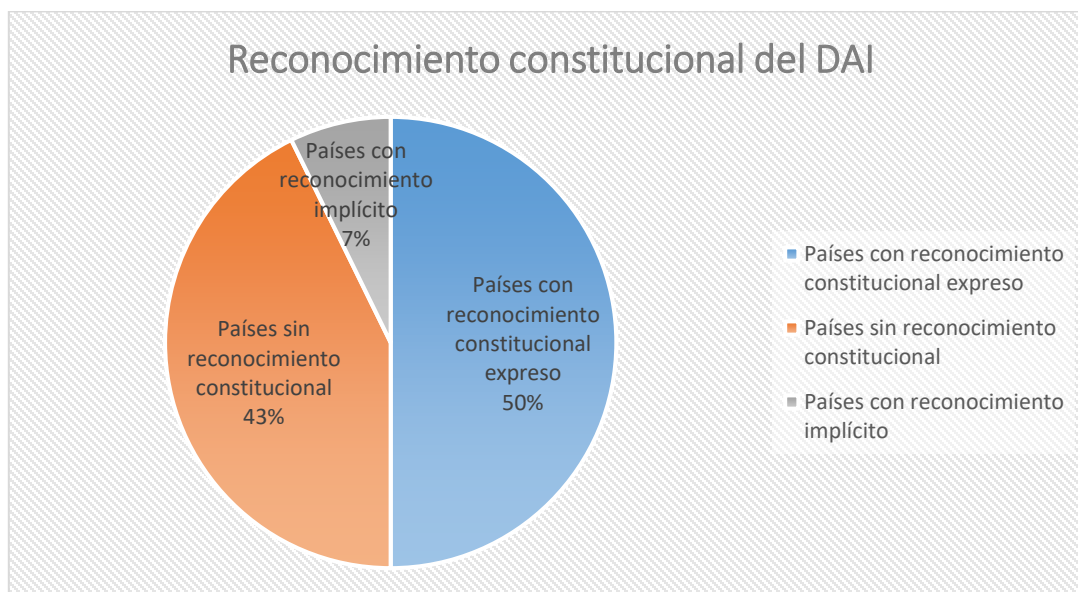
ANEXO

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DERECHO COMPARADO

El anexo ha tomado en consideración dos fuentes principales. En primer lugar, ha empleado los textos actualizados del *Constitution Project*, en las versiones de español e inglés, según el caso⁴. En segundo lugar, ha filtrado resultados a partir del *Global Right to Information Rating*, especialmente para algunos matices relativos a los reconocimientos implícitos del derecho⁵.

RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL DERECHO COMPARADO

El análisis ha revisado una muestra de 124 países, excluyendo a Chile. De aquellos países, el 50% reconoce constitucionalmente el derecho de acceso a la información pública, de forma expresa. Sólo un 7,2% lo hace de forma implícita y un 42,8% no lo reconoce.



Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos desde Constitution Project y RTI Rating

Esta muestra debe tener presente que la revisión parte de una identificación formal del derecho en un texto constitucional.

⁴ Véase [en línea] www.constitutionproject.org (última visita efectuada 13.10.19).

⁵ Véase [en línea] <https://www.rti-rating.org> (última visita efectuada 13.10.19).

Esta muestra requiere tener presente un antecedente que no se considera en los números. Tanto en el sistema interamericano de derechos humanos⁶, como bajo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos⁷, el derecho de acceso a la información pública goza del estatus de obligación internacional de derechos humanos para los Estados Partes de ambos sistemas.

I. Reconocimiento constitucional explícitos

1. Afganistán (2004)	Constitution Article 50(3) The citizens of Afghanistan have the right of access to the information from the government offices in accordance with the provisions of law. 50(4): This right has no limits, unless violation of the rights of the others.
2. Albania (1998, Rev. 2016)	Article 23 of Albanian Constitution: 1. The right to information is guaranteed. 2. Everyone has the right, in compliance with law, to obtain information about the activity of state organs, and of persons who exercise state functions.
3. Austria (1920, Rev. 2013).	Article 20(4) of the 1920 Constitution (as amended): "4) All functionaries entrusted with Federation, Laender and municipal administrative duties as well as the functionaries of other public law corporate bodies shall impart information about matters pertaining to their sphere of competence in so far as this does not conflict with a legal obligation to maintain secrecy; ..."
4. Azerbaijón (1999, Rev. 2013)	Article 39 of the Constitution, "II. Everyone has the right to gain information about true ecological situation and to get compensation for damage done to his/her health and property because of violation of ecological requirements."

⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011): "El Derecho de Acceso a la Información en el Marco Jurídico Interamericano", disponible [en línea]: <https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/acceso%20a%20la%20informacion%202012%20da%20ediccion.pdf> (última visita efectuada 13.110.19).

⁷ Hernández Ramos, Mario (2016): "El Derecho de Acceso a la Información Pública en el Ordenamiento Jurídico Español", en *Transparencia y Sociedad* (Nº 4).

<p>5. Bélgica (1831, Rev. 2014)</p>	<p>Article 32 of the Constitution was amended in 1993 to include a right of access to documents held by the government: "Everyone has the right to consult any administrative document and to have a copy made, except in the cases and conditions stipulated by the laws, decrees, or rulings referred to in Article 134."</p>
<p>6. Benin (1990)</p>	<p>Constitution of Benin 1990, Article 8: The human person is sacred and inviolable. The State has the absolute obligation to respect it and protect it. It shall guarantee him a full blossoming out. To that end, it shall assure to its citizens equal access to health, education, culture, information, vocational training, and employment.</p>
<p>7. Bolivia (2009)</p>	<p>ARTÍCULO 21</p> <p>Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: [...] A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.</p> <p>ARTÍCULO 106</p> <p>I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.</p>
<p>8. Brasil (1988, Rev. 2017)</p>	<p>Art. 216 El patrimonio cultural brasileño incluye bienes materiales e inmateriales, tomados individualmente o en su conjunto, que se refieren a la identidad, acción y memoria de los diversos grupos que conforman la sociedad brasileña, entre ellos:</p> <p>[...] §2º. Es responsabilidad de la administración pública, según lo dispuesto por la ley, mantener documentos gubernamentales y tomar medidas para ponerlos a disposición de las personas que lo necesiten.</p>
<p>9. Bulgaria (1991, Rev. 2015)</p>	<p>Article 41 of the Bulgarian Constitution of 1991 states: "(1) Everyone shall be entitled to seek, receive and impart information. This right shall not be exercised to the detriment of the rights and reputation of others, or to the detriment of national security, public order, public health and morality. (2) Everyone shall be entitled to obtain information from state bodies and</p>

	agencies on any matter of legitimate interest to them which is not a state or official secret and does not affect the rights of others.
10. Burkina Faso (1991, Rev. 2012)	Article 8: The freedoms of opinion, of the press and the right to information are guaranteed.
11. Colombia (1991, Rev. 2015)	ARTÍCULO 74 Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley.
12. Croacia (1991, Rev. 2013)	Article 38 Constitution: "The right to access to information held by any public authority shall be guaranteed. Restrictions on the right to access to information must be proportionate to the nature of the need for such restriction in each individual case and necessary in a free and democratic society, as stipulated by law."
13. República Checa (1993)	The 1993 Charter of Fundamental Rights and Freedoms provides for a right to information. (1) Article 17 states: "(1) Freedom of expression and the right to information are guaranteed. (2) Everybody has the right to express freely his or her opinion by word, in writing, in the press, in pictures or in any other form, as well as freely to seek, receive and disseminate ideas and information irrespective of the frontiers of the State. (3) Censorship is not permitted. (4) The freedom of expression and the right to seek and disseminate information may be limited by law in the case of measures essential in a democratic society for protecting the rights and freedoms of others, the security of the State, public security, public health, and morality. (5) Organs of the State and of local self-government shall provide in an appropriate manner information on their activity. The conditions and the form of implementation of this duty shall be set by law.

<p>14. Ecuador (2008, Rev. 2015)</p>	<p>ARTÍCULO 18</p> <p>Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.
<p>15. Estonia (1992, Rev. 2015)</p>	<p>Article 44 of the Constitution of the Republic of Estonia states:</p> <p>"(1) Everyone has the right to freely obtain information disseminated for public use. (2) All state agencies, local governments, and their officials have a duty to provide information about their activities, pursuant to procedure provided by law, to an Estonian citizen at his or her request, except information the disclosure of which is prohibited by law, and information intended exclusively for internal use. (3) An Estonian citizen has the right to access information about himself or herself held in state agencies and local governments and in state and local government archives, pursuant to procedure provided by law. This right may be restricted pursuant to law to protect the rights and freedoms of others or the confidentiality of a child's parentage, and in the interests of preventing a criminal offence, apprehending a criminal offender, or ascertaining the truth in a criminal proceeding. (4) Citizens of foreign states and stateless persons who are in Estonia have the rights specified in paragraphs two and three of this section equally with Estonian citizens, unless otherwise provided by law."</p>

<p>16. Etiopía (1994)</p>	<p>ARTICLE 29. RIGHT OF THOUGHT, OPINION AND EXPRESSION</p> <p>1. Everyone has the right to hold opinions without interference.</p> <p>2. Everyone has the right to freedom of expression without any interference. This right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any media of his choice.</p> <p>3. Freedom of the press and other mass media and freedom of artistic creativity is guaranteed. Freedom of the press shall specifically include the following elements:</p> <p>a. Prohibition of any form of censorship.</p> <p>b. Access to information of public interest.</p>
<p>17. Fiji (2013)</p>	<p>Article 25.</p> <p>(1) Every person has the right of access to - (a) information held by any public office; and (b) information held by another person and required for the exercise or protection of any legal right. (3) To the extent that it is necessary, a law may limit, or may authorise the limitation of, the rights set out in subsection (1), and may regulate the procedure under which information held by a public office may be made available. Article 150. A written law shall make provision for the exercise by a member of the public of the right to access official information and documents held by the Government and its agencies.</p>
<p>18. Finlandia (1999, Rev. 2011)</p>	<p>Section 12, para. 2: Documents and recordings in the possession of the authorities are public, unless their publication has for compelling reasons been specifically restricted by an Act. Everyone has the right of access to public documents and recordings.</p>

<p>19. Georgia (1995, Rev. 2013)</p>	<p>Article 41(1) Every citizen of Georgia shall have the right to become acquainted, in accordance with a procedure prescribed by law, with the information about him/her stored in state institutions as well as official documents existing there unless they contain state, professional or commercial secret. (2) The information existing on official papers pertaining to individual's health, his/her finances or other private matters, shall not be accessible to any one without the consent of the individual in question except in the cases determined by law, when it is necessary for ensuring the state security or public safety, for the protection of health, rights and freedoms of others.</p>
<p>20. Ghana</p>	<p>Article 21(1)(f) of the Constitution:</p> <p>(1) All persons shall have the right to (f) information, subject to such qualifications and laws as are necessary in a democratic society;</p>
<p>21. Grecia</p>	<p>Article 5(A)</p> <p>(1) All persons have the right to information, as specified by law. Restrictions to this right may be imposed by the law only insofar as they are absolutely necessary and justified for reasons of national security, of combating crime or of protecting rights and interests of third parties. (2) All persons have the right to participate in the Information Society. Facilitation of access to electronically transmitted information, as well as of the production, exchange and diffusion thereof, constitutes an obligation of the State, always in observance of the guarantees of articles 9, 9(A) and 19.</p>

22. Hungría	Article VI: (2) Everyone shall have the right to the protection of his or her personal data, as well as to access and disseminate data of public interest. (3) The application of the right to the protection of personal data and to access data of public interest shall be supervised by an independent authority established by a cardinal Act.
23. Indonesia	Article 28(f) Every person shall have the right to communicate and to obtain information for the purpose of the development of his/her self and social environment, and shall have the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information by employing all available types of channels.
24. Kazakhstan	20(2) Everyone shall have the right to freely receive and disseminate information by any means not prohibited by law. The list of items constituting state secrets of the Republic of Kazakhstan shall be determined by law.
25. Kenya	Article 35 (1) Every citizen has the right of access to - (a) information held by the State; and (b) information held by another person and required for the exercise or protection of any right or fundamental freedom. (2) Every person has the right to the correction or deletion of untrue or misleading information that affects the person. (3) The State shall publish and publicise any important information affecting the nation.
26. Kosovo	Article 41 (1) Every person enjoys the right of access to public documents. (2) Documents of public institutions and organs of state authorities are public, except for information that is limited by law due to privacy, business trade secrets or security classification.

<p>27. Latvia</p>	<p>Article 100. "Everyone has the right to freedom of expression which includes the right to freely receive, keep and distribute information and to express their views. Censorship is prohibited." Article 104. "Everyone has the right to address submissions to State or local government institutions and to receive a materially responsive reply. Article 115. The State shall protect the right of everyone to live in a benevolent environment by providing information about environmental conditions and by promoting the preservation and improvement of the environment."</p>
<p>28. Liberia</p>	<p>Article 15(b): "The right encompasses the right to hold opinions without interference and the right to knowledge. It includes freedom of speech and of the press, academic freedom to receive and impart knowledge and information and the right of libraries to make such knowledge available. It includes non-interference with the use of the mail, telephone and telegraph. It likewise includes the right to remain silent." Constitution Art. 15(c): "In pursuance of this right, there shall be no limitation on the public right to be informed about the government and its functionaries."</p>
<p>28. Lituania</p>	<p>Article 25 of Lithuania's 1992 Constitution states "The citizen shall have the right to receive, according to the procedure established by law, any information concerning him that is held by State institutions."</p>
<p>29. Macedonia</p>	<p>Article 16 of the Constitution of Macedonia provides: "The freedom of speech, public address, public information and the establishment of institutions for public information is guaranteed. Free access to information and the freedom of reception and transmission of information are guaranteed"</p>
<p>30. Malawi</p>	<p>Article 37. Subject to any Act of Parliament, every person shall have the right of access to all information held by the State or any of its organs at any level of Government in so far as such information is required for the exercise of his rights.</p>

31. México	<p>Artículo 6. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="609 451 1421 1102">I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.<li data-bbox="609 1123 1421 1228">II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.<li data-bbox="609 1249 1421 1396">III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.<li data-bbox="609 1417 1421 1564">IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.<li data-bbox="609 1585 1421 1778">V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan
-------------------	--

	<p>rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.</p> <p>VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.</p> <p>VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.</p> <p>VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.</p> <p>El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.</p> <p>En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.</p> <p>El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con</p>
--	---

	<p>excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.</p> <p>El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.</p> <p>La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p> <p>Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.</p> <p>El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.</p> <p>En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva</p>
--	---

propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

	<p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.</p>
<p>32. Moldova</p>	<p>Article 34 (The Right of Access to Information): "Having access to any information of public interest is everybody's right that may not be curtailed. According with their established level of competence, public authorities shall ensure that citizens are correctly informed both on public affairs and matters of personal interest. The right of access to information may not prejudice either the measures taken to protect the citizens or the national security.[...]"</p>
<p>33. Montenegro</p>	<p>Constitution Article 51 "Everyone shall have the right to access information held by the state authorities and organizations exercising public authority. The right to access to information may be limited if this is in the interest of: the protection of life; public health; morality and privacy; carrying of criminal proceedings; security and defense of Montenegro; foreign, monetary and economic policy."</p>

<p>34. Marruecos</p>	<p>ARTICLE 27</p> <p>The citizens [feminine] and citizens [masculine] have the right of access to information held by the public administration, the elected institutions and the organs [organismes] invested with missions of public service.</p> <p>The right to information may only be limited by the law, with the objective [but] of assuring the protection of all which concerns national defense, the internal and external security of the State, and the private life of persons, of preventing infringement to the fundamental freedoms and rights enounced in this Constitution and of protecting the sources and the domains determined with specificity by the law.</p>
<p>35. Mozambique</p>	<p>Article 48 Freedom of Expression and Information</p> <p>1. All citizens shall have the right to freedom of expression and to freedom of the press, as well as the right to information. 6. The exercise of the rights and freedoms provided for in this article shall be governed by law on the basis of the imperative respect for the Constitution and for the dignity of the human person.</p>
<p>36. Nepal</p>	<p>27. Right to information: Every citizen shall have the right to seek information on any matters of concern to her/him or the public. Provided that nothing shall be deemed to compel any person to provide information about which confidentiality is to be maintained according to law.</p>
<p>37. Noruega</p>	<p>Constitution of Norway, Article 100, Paragraph 4. "Everyone has a right of access to documents of the State and municipal administration and a right to follow the proceedings of the courts and democratically elected bodies. Limitations to this right may be prescribed by law to protect the privacy of the individual or for other weighty reasons."</p>
<p>38. Pakistán</p>	<p>Article 19A. Every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restrictions imposed by law.</p>

39. Palau	Article IV, Section 12: "A citizen has the right to examine any government document and to observe the official deliberations of any agency of government."
40. Panamá	ARTÍCULO 43 Toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación.
41. Paraguay	ARTÍCULO 28. DEL DERECHO A INFORMARSE Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios.

42. Perú	<p>ARTÍCULO 2°</p> <p>Toda persona tiene derecho: [...] 5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.</p> <p>Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.</p> <p>El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.</p>
43. Filipinas	<p>Constitution Art III, Section 7: The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records, and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development, shall be afforded the citizen, subject to such limitations as may be provided by law. \"</p>
44. Polonia	<p>Article 61(1): A citizen shall have the right to obtain information on the activities of organs of public authority as well as persons discharging public functions. Such right shall also include receipt of information on the activities of self-governing economic or professional organs and other persons or organizational units relating to the field in which they perform the duties of public authorities and manage communal assets or property of the State Treasury. (2)The right to obtain information shall ensure access to documents and entry to sittings of collective organs of public authority formed by universal elections, with the opportunity to make sound and visual recordings. (3)Limitations upon the rights referred to in paras. 1 and 2 above, may be imposed by statute solely to protect freedoms and rights of other persons and economic subjects, public order, security or important economic interests of the State. (4)The procedure for the provision of</p>

	<p>information, referred to in paras. 1 and 2 above shall be specified by statute, and regarding the Sejm and the Senate by their rules of procedure.</p>
<p>45. Portugal</p>	<p>Article 268 of the 1989 Constitution states:</p> <p>(1) Citizens shall possess the right to be informed by the Administration whenever they so request as to the progress of the processes in which they are directly interested, as well as to be made aware of such decisions as are taken in relation to them.</p> <p>(2) Without prejudice to the law governing matters of internal and external security, criminal investigation and personal privacy, citizens shall also possess the right of access to administrative files and records.</p> <p>(3) Administrative acts shall be subject to notification to the interested parties in the form laid down by law, and when they affect rights or interests that are protected by law, shall be based on express grounds that can be accessed by the parties.</p> <p>(4) Citizens shall be guaranteed effective judicial oversight of those of their rights and interests that are protected by law, particularly including the recognition of the said rights and interests, the impugnation of any administrative act that harms their rights and interests, regardless of its form, the issue of positive rulings requiring the practise of administrative acts that are due by law, and the issue of adequate injunctions.</p> <p>(5) Citizens shall also possess the right to challenge administrative rules which possess external force and which harm any of their rights or interests that are protected by law.</p> <p>(6) For the purposes of (1) and (2) above the law shall lay down a maximum time limit for responses by the Administration.</p>

<p>46. Rumania</p>	<p>Constitution, Chapter II, Article 31: (Right to information): A person's right of access to any information of public interest shall not be restricted. The public authorities, according to their competence, shall be bound to provide correct information to the citizens in public affairs and matters of personal interest. The right to information shall not be prejudicial to the measures of protection of young people or national security. Article 1: The individual's free and unconstraint access to public information, thus defined in this Law, represents one of the fundamental principles of the relations between the individuals and the public authorities in conformity with the Romanian Constitution and the international documents ratified by the Romanian Parliament.</p>
<p>47. Serbia</p>	<p>Constitution of Serbia, Article 51. Paragraph 2: "Everyone shall have the right to access information kept by state bodies and organizations with delegated public powers, in accordance with the law."</p>
<p>48. Seychelles</p>	<p>28.</p> <p>(1) The State recognises the right of access of every person to information relating to that person and held by a public authority which is performing a governmental function and the right to have the information rectified or otherwise amended, if inaccurate.</p> <p>(2) The right of access to information contained in clause (1) shall be subject to such limitations and procedures as may be prescribed by law and are necessary in democratic society including— (a) for the protection of national security; (b) for the prevention and detection of crime and the enforcement of law; (c) for the compliance with an order of a court or in accordance with a legal privilege; (d) for the protection of the privacy or rights or freedoms of others;</p> <p>(3) The State undertakes to take appropriate measures to ensure that information collected in respect of any person for a particular purpose is used only for that purpose except where a law</p>

	<p>necessary in a democratic society or an order of a court authorises otherwise.</p> <p>(4) The State recognises the right of access by the public to information held by a public authority performing a governmental function subject to limitations contained in clause (2) and any law necessary in a democratic society.</p>
49. Eslovaquia	Article 26. "(5) State bodies and territorial self-administration bodies are under an obligation to provide information on their activities in an appropriate manner and in the state language. The conditions and manner of execution will be specified by law."
50. Eslovenia	Article 39: Except in such cases as are provided by law, everyone has the right to obtain information of a public nature in which he has a well founded legal interest under law."
51. Sudáfrica	32 (1) Everyone has the right of access to- (a) any information held by the state; and (b) any information that is held by another person and that is required for the exercise or protection of any rights. (2) National legislation must be enacted to give effect to this right, and may provide for reasonable measures to alleviate the administrative and financial burden on the state.
52. Sri Lanka	Article 14A . (1) Every citizen shall have the right of access to any information as provided for by law, being information that is required for the exercise or protection of a citizens right held by:- (a) the State, a Ministry or any Government Department or any statutory body established or created by or under any law; (b) any Ministry of a Minster of the Board of Ministers of a Province or any Department or any statutory body established or created by a statute of a Provincial Council; (c) any local authority; and (d) any other person, who is in possession of such information relating to any institution referred to in sub-paragraphs (a) (b) or (c) of this paragraph. (2) No restrictions shall be placed on the

	<p>right declared and recognized by this Article, other than such restrictions prescribed by law as are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals and of the reputation or the rights of others, privacy, prevention of contempt of court, protection of parliamentary privilege, for preventing the disclosure of information communicated in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. (3) In this Article, citizen includes a body whether incorporated or unincorporated, if not less than three-fourths of the members of such body are citizens.</p>
<p>53. Sudán del Sur</p>	<p>Article 32. Every citizen has the right of access to official information and records, including electronic records in the possession of any level of government or any organ or agency thereof, except where the release of such information is likely to prejudice public security or the right to privacy of any other person.</p>
<p>54. Suecia</p>	<p>CONSTITUTION OF SWEDEN. The Freedom of the Press Act. Chapter 2. (On the public nature of official documents). Article 1: \"Every Swedish citizen shall be entitled to have free access to official documents, in order to encourage the free exchange of opinion and the availability of comprehensive information.\"</p>
<p>55. Tailandia</p>	<p>Article 56. A person shall have the right to get access to public information in possession of a State agency, State enterprise or local government organization, unless the disclosure of such information shall affect the security of the State, public safety, interests of other persons which shall be protected or private information as provided by law. Article 57. A person shall have the right to receive information, explanation, and reason from a State agency, State enterprise or local government organization before permission is given for operation of any project or activity which may affect the quality of environment, health, and sanitary conditions, the quality of life or any other material interest concerning him or her or a local community and shall have the</p>

	<p>right to express his or her opinion on such matters to agencies concerned for consideration in that matters. In undertaking any social, economic, political, and cultural development planning, appropriation of immovable property, city planning, land use zoning, and issuance of regulations which may affect the interests of the people, the State shall thoroughly hold public hearings procedure prior to implementation.</p>
<p>56. Túnez</p>	<p>Constitution, Art. 32: The State shall guarantee the right to information and the right to access to information.</p>
<p>57. Uganda</p>	<p>41. RIGHT OF ACCESS TO INFORMATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Every citizen has a right of access to information in the possession of the State or any other organ or agency of the State except where the release of the information is likely to prejudice the security or sovereignty of the State or interfere with the right to the privacy of any other person. 2. Parliament shall make laws prescribing the classes of information referred to in clause (1) of this article and the procedure for obtaining access to that information. 3.
<p>58. Ucrania</p>	<p>National Constitution Article 34 guarantees the right to information in the following terms: "Everyone is guaranteed the right to freedom of thought and speech, and to the free expression of his or her views and beliefs. Everyone has the right to freely collect, store, use and disseminate information by oral, written or other means of his or her choice. The exercise of these rights may be restricted by law in the interests of national security, territorial indivisibility or public order, with the purpose of preventing disturbances or crimes, protecting the health of the population, the reputation or rights of other persons, preventing the publication of information received confidentially, or supporting the authority and impartiality of justice."</p>

<p>59. Yemen</p>	<p>Article 25: (of Constitution): The citizen shall enjoy the right to freedom of opinion and speech, freedom of the press, to access to information, to assemble, form associations and hold demonstrations. The practice of these rights shall be provided by the law.</p>
<p>60. Zimbawe</p>	<p>Article 20 of the Constitutional Right: "Protection of freedom of expression".</p> <p>(1) Except with his own consent or by way of parental discipline, no person shall be hindered in the enjoyment of his freedom of expression, that is to say, freedom to hold opinions and to receive and impart ideas and information without interference, and freedom from interference with his correspondence.</p> <p>(2) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be in contravention of subsection (1) to the extent that the law in question makes provision (a) in the interests of defence, public safety, public order, the economic interests of the State, public morality or public health; (b) for the purpose of (i) protecting the reputations, rights and freedoms of other persons or the private lives of persons concerned in legal proceedings; (ii) preventing the disclosure of information received in confidence; (iii) maintaining the authority and independence of the courts or tribunals or the Senate or the House of Assembly; (iv) regulating the technical administration, technical operation or general efficiency of telephony, telegraphy, posts, wireless broadcasting or television or creating or regulating any monopoly in these fields; (v) in the case of correspondence, preventing the unlawful dispatch therewith of other matter; or (c) that imposes restrictions upon public officers; except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.</p> <p>(3) No religious denomination and no person or group of persons shall be prevented from establishing and maintaining schools, whether or not that denomination, person or group is in receipt</p>

	<p>of any subsidy, grant or other form of financial assistance from the State.</p> <p>(4) Nothing contained in or done under the authority of any law shall be held to be in contravention of subsection (3) to the extent that the law in question makes provision (a) in the interests of defence, public safety, public order, public morality, public health or town and country planning; or (b) for regulating such schools in the interests of persons receiving instruction therein; except so far as that provision or, as the case may be, the thing done under the authority thereof is shown not to be reasonably justifiable in a democratic society.</p> <p>(5) No person shall be prevented from sending to any school a child of whom that person is parent or guardian by reason only that the school is not a school established or maintained by the State.</p> <p>(6) The provisions of subsection (1) shall not be held to confer on any person a right to exercise his freedom of expression in or on any road, street, lane, path, pavement, side-walk, thoroughfare or similar place which exists for the free passage of persons or vehicles."</p>
--	---